

Suprema Corte:

I

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, declaró procedente la extradición de Octavio Á. R. a la República de Paraguay (fs. 353/357), que lo requirió para someterlo a proceso por el delito de homicidio doloso en calidad de autor (fs. 175/293). Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación ordinario (fs. 361 y 402/405 vta.)

II

La recurrente invoca la arbitrariedad de la sentencia impugnada, sosteniendo que el *a quo* descartó de plano todas las argumentaciones y la prueba aportada respecto de la inocencia del requerido y su condición de perseguido político (fs. 402 vta./403).

Afirma que, de concretarse el traslado, no se le respetarían las garantías constitucionales del debido proceso, puesto que “fue un férreo opositor a la administración de D.” y “poseía una radio comunitaria donde permitía a los campesinos denunciar hechos de corrupción” (fs. 403 vta.) Y a pesar del cambio de gobierno en el país requirente, “[l]os datos establecen que los estándares de la justicia tachados de parciales y corruptos están aún intactos” (fs. 404).

Para acreditar esta circunstancia, acompaña una carta del hermano del requerido al Parlamento paraguayo y sendas notas de la “Comisión de Derechos Humanos y el ‘Nunca más al Terrorismo de Estado’”, de la Oficina Distrital del Registro Electoral de la ciudad de Abai, del “Frente Social y Popular” y de la “Contraloría Ciudadana del

Distrito de Abai”, en las que se manifiesta que el requerido fue víctima de persecuciones políticas por haber sido un opositor del gobierno anterior (fs. 377/400).

III

V.E. ha recordado, en un fallo reciente (S.C., C. 2111, XLI., *in re* “Cortada, Ramón s/extradición”, sentencia del 8 de abril de 2008), que “es pacífica la doctrina del Tribunal en el sentido de que el proceso de extradición no reviste el carácter de un juicio criminal, por lo que no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables (Fallos: 323:1755; 326:3696, entre otros)” (considerando 2º). Así, resulta claro que el juez de la extradición no debe merituar la prueba ni los argumentos que fundamentan la imputación en el Estado requirente, tal como pretende la defensa.

En el mismo fallo, además, V.E. ha explicado que no son admisibles los agravios que “remiten al conocimiento de cuestiones de fondo que resultan ajenas a este trámite y que deben ser ventiladas ante los tribunales del Estado requirente, toda vez que se dirigen a cuestionar la legalidad del procedimiento extranjero (Fallos: 314:1132; 318:373, entre otros)” (considerando 2º).

Por último, entiendo acertada la afirmación del *a quo* respecto de que la defensa no logró probar la existencia de la excepción prevista en el art. 3.2 del tratado aplicable. Los artículos periodísticos y las declaraciones incorporadas a este trámite extraditorio (fs. 174, 322, 328, 347, 351 y vta. y 378/401), que trasuntan hipótesis sobre la influencia que ejercerían el presidente anterior del país requirente y sus aliados políticos en el desempeño de los magistrados y agentes del poder judicial, no son

suficientes para demostrar la intención maliciosa del Estado paraguayo al pedir la extradición de Á. R.. Máxime cuando, como lo reconoce la defensa misma, actualmente el país está gobernado por un presidente opositor del anterior y que en ese Estado, como ha afirmado V.E., “existen mecanismos de protección nacionales y supranacionales que, a todo evento, podrán ejercer un control acerca de las condiciones que preocupan al extraditable’ (Fallos: 324:3484 y sus citas)” (S.C., A. 2112. XLII., *in re* “Acosta González, Agustín y otros s/extradición – pedido de captura”, sentencia del 21 de octubre de 2008).

En síntesis, mal puede prosperar este agravio si no se acompañan pruebas que apunten la protesta de la defensa, sin que puedan considerarse tales, conjeturas que no alcanzan para conmover la confianza que necesariamente depositan los Estados contratantes en sus respectivos sistemas de gobierno y, particularmente, en que los tribunales del país requirente han de aplicar con justicia la ley de la tierra (doctrina de Fallos: 329:1245).

IV

Por lo expuesto, opino que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia que concede la extradición de Octavio Á. R., en todo cuanto fuera materia de agravio.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.

ES COPIA

LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE